



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Liquidación sociedad comercial de hecho
DEMANDANTE	Rafael Rojas Niño
DEMANDADA	Margoína Ortiz Villa
RADICADO	05001 31 03 001 2013 00803 01
DECISIÓN	Confirma auto apelado

Medellín, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el proceso de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. En providencia de 2 de febrero de 2023 el Juzgado 018 Civil del Circuito de Medellín resolvió el incidente de exclusión de bienes del inventario presentado por el liquidador, por lo que declaró la prosperidad parcial del incidente el cual quedó comprendido solo por el inmueble con M.I. 01N-5040108 y los frutos civiles recaudados de este. De igual modo, decidió excluir del inventario la cuenta de ahorros No. 36-26977855 de Bancolombia S.A. a nombre de Margoína Ortiz Villa. Precisó que la demandada cuenta con un porcentaje de 75% del bien antes referenciado y el demandante lo tiene de 25%. Finalmente, negó las objeciones formuladas por el demandante.

El despacho de primer nivel negó el incidente y como fundamento de lo anterior, consideró que en sentencia de 16 de diciembre de 2011 el Juzgado 010 Civil del Circuito declaró la existencia de la sociedad de hecho entre las partes aquí convocadas, proveído que fue confirmado por la Sala Segunda de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín. En tal resolución se determinó como fecha de configuración de la sociedad de hecho de carácter mercantil el 1 de marzo de 2003 hasta 2009 y también se definió que en el proceso de liquidación sería que se establecerían cuáles eran los bienes que integraban la sociedad. El fallador de primer grado sostuvo que, iniciado el procedimiento de

liquidación, el 27 de julio de 2022 se llevó a cabo la diligencia de inventario de activos y pasivos, para lo cual, el liquidador presentó una relación detallada de los que consideró, activos y pasivos de la sociedad, por lo que el inventario quedó de la siguiente manera:

Activos:

a) Inmueble identificado con M.I. No. 01N-5040108 ubicado en la calle 50 No. 74-11 en la ciudad de Medellín.

b) Títulos judiciales por valor de \$96'987.639 más un valor de \$1'307.231 que el liquidador tiene en efectivo.

c) Cuenta de ahorros No. 236 269 778 55 activa a nombre de la demandada por valor de \$735.700.53

Pasivos:

Deuda por impuesto predial por el inmueble relacionado por un valor de \$12'133.884.

Frente al anterior inventario de bienes la señora Ortiz Villa mediante apoderado judicial formuló objeción basada en que, el inmueble referenciado fue adquirido con dineros propios cuyo origen se remonta a 1994, y no fue aportado a la sociedad de hecho, es decir, el dinero con el que se pagó el bien era de la demandada y no de la sociedad. Surtido el traslado de la objeción, el demandante se pronunció e indicó que la accionada trata de justificar unos valores invertidos en la adquisición del inmueble, con el propósito de defraudar los intereses de la sociedad, fruto del trabajo conjunto en el centro de estética. Adujo que algunos de los bienes propios de la demandada fueron vendidos antes de 2000 y, respecto de otros, la venta se dio con posterioridad al año en que se hizo la compraventa del inmueble objeto de litigio; afirmó que esos recursos se pusieron a rentar en hipotecas, más no se destinaron a la consecución del inmueble. Expuso que en la escritura pública de compraventa no se hizo la advertencia de que los dineros eran propios para que obrara como subrogación.

Así las cosas, el Juzgado 018 Civil del Circuito de Medellín concluyó que conforme con las pruebas obrantes en el plenario se evidenciaba que el inmueble identificado con M.I. No. 01N-5040108 fue adquirido por Margoína Ortiz Villa mediante Escritura Pública No. 7392 de 30 de noviembre de 2005 de la Notaría 001 del Círculo de Medellín, celebrada con Alonso Morales Galvis y Jairo Londoño Osorio. Conforme con las cláusulas 5 y 6 del contrato se observó que, durante el periodo de marzo a 15 de diciembre de 2005, la compradora entregó a los vendedores la suma de \$100'000.000 y en esa oportunidad se comprometió a cancelar la suma restante durante un plazo de 3 años, otorgando hipoteca abierta que gravaba el bien, para amparar el pago del valor restante de venta por \$100'000.000. En este sentido, el juez tuvo en cuenta que, con dineros propios la demandada pagó la primera parte de la obligación, circunstancia que se ratificó con la declaración del demandante, quien el 16 de octubre de 2016 reconoció que, parte del precio del valor del inmueble fue cancelado con la venta de unos bienes de la señora Ortiz Villa en una cifra aproximada de \$70'000.000, sin embargo, después trató de aducir que el capital contenía también aportes fruto de la actividad comercial conjunta, debido a la ambigüedad de la respuesta, el despacho lo requirió para que precisara su dicho, a lo que dijo que *"...los aportes de doña Margot como lo dije inicialmente fueron de 70 millones de pesos, el capital restante a pagar fue el producto del centro de estética Margot Ortiz, debido a que se dieron las facilidades de pago en cuotas que finalizaron por cancelar el capital restante"*.

En virtud de lo anterior, el juzgador señaló que en atención a que el pago de los primeros \$100'000.000 se dio en un corto intervalo temporal, marzo a diciembre de 2005, y que la actividad mercantil con los centros de belleza estaba en proceso de consolidación, ello permitió establecer que, ese primer pago, se hizo con dineros de Margoína Ortiz Villa, por lo que sería razonable deducir que ella canceló con su patrimonio el 50% del valor del bien. En relación con el pago de la segunda suma de dinero y lo relativo al origen de los recursos, cantidad, periodicidad y forma de pago a los acreedores, el despacho consideró que no había claridad, pues cuando la demandada se opuso al inventario no allegó prueba que diera cuenta de la forma de cancelación del saldo restante, y un escrutinio de las pruebas documentales arrimadas no evidencia la forma, el medio, la periodicidad y los destinatarios de los pagos parciales de la obligación restante de forma tal que, para un día

cierto y determinado durante 2009, esta se hubiese cancelado, esencialmente con recursos propios de la señora Ortiz Villa.

Así las cosas, el juzgado señaló que entre el 1 de marzo de 2003 y finales de 2009 la sociedad mercantil de hecho tenía en funcionamiento sus establecimientos de comercio y estaba en desarrollo de su objeto social, por lo que era dable inferir que, con la adquisición del inmueble, este vino a suplir una necesidad espacial para mejorar la calidad del servicio que se ofrecía, prestaba y facturaba, lo cual, terminó redundando en beneficio de la actividad, generándose a su vez, un mejor flujo de rendimientos económicos. Por ello ultimó que los \$100'000.000 restantes, fueron cancelados con los rendimientos o frutos que la actividad comercial de los establecimientos SPA producían; luego, a cada uno de los socios, de estos \$100'000.000, les correspondería un porcentaje de 50%, lo que permite establecer que la señora Ortiz Villa cuenta con un 75% y el señor Rojas Niño con 25%. Esclarecido lo cual, definió que al liquidador le correspondería determinar cuál era el valor del inmueble para finales de 2009, porque a partir del año siguiente, la administración del bien quedó por cuenta de la demandada, quien ha hecho mejoras a la propiedad, por ello no resultaría equitativo, prudente ni razonable considerar que es posible asignar un porcentaje del 25% respecto del estado actual del bien. En cuanto a los frutos civiles que se ha recaudado, indicó que una vez se tuviera claro por el liquidador cuál era el valor del bien a finales de 2009, sería posible calcular a partir de ese dato, cuánto corresponde a cada uno de los socios.

Respecto a la cuenta de ahorros No. 236-26977855 a nombre de la accionada, el despacho resolvió que no existía pruebas tendientes a demostrar que dicho producto bancario fue adquirido por y con motivo de la sociedad de hecho mercantil, en otras palabras, no había certeza de que dicha cuenta fuera para administrar los recursos producto de la actividad comercial propia y exclusiva a la cual se dedicaban los centros de belleza tipo SPA, Margoína No. 1 y No. 2.

Finalmente, en lo atinente a los frutos civiles producidos por el SPA en el período 2004 a 2015, concluyó que, debido a la ausencia de una adecuada administración contable durante ese lapso, no era posible determinar con claridad, cuáles eran los réditos, utilidades y ganancias percibidas durante la época que duro la sociedad.

1.2. Inconforme con la decisión, el extremo procesal activo interpuso recurso de apelación con el fin de que la providencia fuera revocada. Para tal efecto, adujo que el despacho de primer nivel no consideró que el demandante tuvo un aporte intelectual a la sociedad, sin el cual no se hubiese generado las utilidades del negocio, pues él era un experto y conocedor de esa clase de actividades comerciales. Adicionalmente, adujo que la demandada no contestó la demanda y excluir los bienes antes relacionados era premiarla, al darle un porcentaje que no guarda relación con la actividad desarrollada por él. Cuestionó la orden dirigida a que el liquidador avalúe el inmueble para 2009, pues sobre el inmueble en cuestión se ha hecho mejoras y la señora Ortiz Villa ha ejercido el derecho de usufructo, por lo que no sería lógico que el avalúo se circunscriba a esa fecha.

De igual modo, señaló que el valor de los cánones de arrendamiento, consignado en la cuenta de depósitos judiciales, también debía ser repartido en la proporción legal que correspondiera, pues ingresó al patrimonio de la sociedad. En cuanto a la exclusión de la Cuenta de Ahorros No. 36-26977855 a nombre de la señora Ortiz Villa, sostuvo que el solo hecho de que estuviera a nombre de la demandada, no significaba que los ingresos a ese producto financiero no fueran producto del logro comercial de la sociedad. Finalmente, adujo que no existía una sola prueba que permitiera determinar lo decidido por el *a quo* pues se debió tener en cuenta lo expuesto en todo el trámite.

1.3. En proveído de 13 de febrero de 2023 el Juzgado 018 Civil del Circuito de Medellín concedió la alzada.

CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 530 establece las reglas que se debe tener en cuenta para la liquidación de sociedades de hecho. Al respecto la norma señala:

"ARTÍCULO 530. REGLAS DE LA LIQUIDACIÓN. Para la liquidación se procederá así:

1. Una vez posesionado el liquidador deberá elaborar el inventario de activos y pasivos y presentarlo dentro del término que el juez le otorgue teniendo en cuenta el tamaño de la sociedad y el número de acreedores.

Los pasivos deberán presentarse con sujeción a la prelación legal y actualizarse a la fecha en que quede en firme la sentencia que decretó la nulidad o dispuso la liquidación, incluyendo capital, sanciones legales o convencionales y los correspondientes intereses.

Los activos serán relacionados uno por uno, indicando cantidad, calidad, nomenclatura y cualquier dato necesario para su identificación.

2. Una vez presentado el inventario de activos y pasivos, el juez señalará fecha y hora para audiencia, en la cual lo pondrá en conocimiento de los acreedores y de los socios.

En la providencia que señale fecha para audiencia, el juez ordenará al liquidador que informe a cada acreedor la cuantificación de su acreencia, así como la fecha señalada, lo cual deberá acreditar al despacho de manera inmediata, so pena de remoción.

En todo caso, la providencia que señale fecha para la audiencia deberá inscribirse en el registro mercantil.

3. En la audiencia el juez pondrá en conocimiento de los acreedores y de los socios, el inventario de activos y pasivos, a fin de que cualquier acreedor pueda formular objeciones, solicitar aclaración o complementación.

Si a juicio de un acreedor o de los socios, el inventario no incluye la totalidad de los activos, deberá denunciar tal circunstancia, indicando los datos exactos del bien y su lugar de ubicación.

4. Quien formule la objeción por considerar que una acreencia no es cierta, que no tiene la prelación legal dada por el liquidador, o que su cuantía no es la señalada en el inventario, deberá expresar las razones

de su dicho, solicitar la práctica de pruebas y aportar los documentos que obren en su poder.

5. Practicadas las pruebas si a ello hubiere lugar, el juez decidirá la objeción en la misma audiencia.

6. En firme la decisión, el liquidador procederá a pagar las acreencias con estricta sujeción a la prelación legal.

7. En cuanto al avalúo de bienes y su venta se aplicarán las reglas del proceso ejecutivo.

8. Si practicadas tres (3) diligencias de remate no se ha logrado enajenar todos los activos, el juez ordenará al liquidador que dentro de los diez (10) días siguientes a la última diligencia presente una propuesta de distribución de los activos entre los acreedores.

9. Existiendo dineros y otros activos, el liquidador distribuirá el dinero descontando los gastos del proceso aprobados por el juez, entre los acreedores de mejor derecho, con observancia del principio de igualdad entre cada clase y grado de prelación legal.

La propuesta de distribución se dará a conocer a los acreedores y a los socios en una audiencia en la que además el juez resolverá cualquier objeción que presenten los acreedores o los socios, y procederá a adjudicar los bienes.

10. Proferida la providencia de adjudicación, el juez levantará las medidas cautelares y ordenará al liquidador que dentro de los diez (10) días siguientes haga entrega física de los activos a los adjudicatarios.

11. Entregados los activos a los acreedores o pagadas las acreencias según el caso, el liquidador rendirá cuentas finales al juez quien luego de aprobarlas ordenará el pago de la remuneración final al auxiliar de la justicia y la terminación del proceso”.

2.2. Por su parte, el artículo 167 prevé la carga que tienen las partes de probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen:

"ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba".

CASO EN CONCRETO

En el caso bajo examen, el recurso formulado plantea resolver si el juez de primer grado tuvo razón al declarar la prosperidad parcial del incidente de exclusión de bienes del inventario presentado por el liquidador, en relación con el 50% del inmueble identificado con M.I. No. 01N-5040108 y los frutos civiles recaudados; así como la exclusión de la Cuenta de Ahorros No. 36-26977855 de Bancolombia S.A. a nombre de la demandada.

Al respecto, se advierte que la decisión proferida por el *a quo* se ajusta a derecho, pues como bien se definió, respecto del inmueble referenciado se observa que, de conformidad con la sentencia proferida por el Juzgado 014 de Descongestión de Medellín, confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad el 2 de noviembre de 2012, la sociedad de hecho entre las partes se configuró desde el 1 de marzo de 2003 hasta 2009. Esto aunado a que, con los elementos suasorios traídos al plenario se evidencia que en la Escritura Pública No. 7392 de 30 de noviembre de 2005 de la Notaría 001 del Círculo de Medellín, en las cláusulas 5 y 6 se dispuso que la señora Ortiz Villa pagaría \$100'000.000, o sea el 50% del predio, en el periodo de marzo a 15 de diciembre de 2005, como en efecto acaeció, mientras que, el excedente del valor, es decir, \$100'000.000 sería cancelado en un plazo de 3 años, para lo cual se otorgó hipoteca abierta que gravó el inmueble. Sumado a ello, el demandante en interrogatorio de parte llevado a cabo el 16 de octubre de 2016, informó que, parte del precio del bien fue cancelado con la venta de algunas propiedades de la demandada, en una cifra aproximada de \$70'000.000, y pese a que, el accionante trató de indicar que ese capital contenía aportes fruto de la actividad comercial, debido a que, la respuesta no fue concreta, se le instó a aclarar lo dicho, y precisó que los aportes de la señora Ortiz Villa fueron de \$70'000.000, y que el capital restante se pagó con las utilidades del centro de estética Margot Ortiz.

En este sentido, la decisión del juez de primer grado resulta lógica y acertada, pues conforme con las pruebas obrantes en el expediente, se observa que el 50% del bien inmueble en mención fue cancelado por la demandada con dineros propios y no existe un medio probatorio que permita inferir lo contrario. Ahora, en relación con el excedente, no hay certeza de la forma de pago, la periodicidad y los destinatarios del mismo, de forma que no es posible identificar la fecha de 2009 en que el valor restante fue cancelado. De igual manera, analizadas las declaraciones de renta de la demandada no hay convicción entre el saldo debido y el pasivo que correspondía a los años 2006 a 2009. Por lo anterior, el fallador de instancia determinó que si entre el 1 de marzo de 2003 y finales de 2009 la sociedad funcionaba en sus establecimientos de comercio y estaba en desarrollo de su objeto social, era posible deducir que, la adquisición del inmueble suplió la necesidad espacial para mejorar la calidad del servicio, lo cual iba en beneficio de la sociedad, por

lo tanto, concluyó que el 50% restante del inmueble fue pagado con los ingresos que generó el SPA, por ello dicho porcentaje debía ser dividido por partes iguales entre los extremos procesales.

De otra parte, definió que al liquidador le correspondería efectuar el avalúo del inmueble para 2009, pues después de esa fecha la demandada había hecho algunas mejoras, por lo que no resultaría equitativo, prudente y razonable, asignar un porcentaje de 25% al demandante respecto del valor actual, pues ello conduciría a desconocer las mejoras perpetradas y generaría un enriquecimiento sin causa del accionante.

Así las cosas, el *a quo tuvo razón* al establecer el coeficiente porcentual del cual son propietarias las partes en relación con el inmueble en comento, pues pese a que el demandante afirmó que el precio del bien se pagó con el producto de la actividad comercial desarrollada, lo cierto es que, las pruebas obrantes en el plenario dan cuenta de que el 50% del inmueble fue cancelado con recursos propios de la señora Ortiz Villa y ante la falta de prueba del pago del restante 50%, el análisis hecho por el juzgador resulta atinado, pues a la fecha en que el pago total de la obligación se hizo, la sociedad había tenido un desarrollo prolongado en el tiempo, sobre todo porque dicho inmueble sirvió para suplir la necesidad espacial de la empresa.

Por otro lado, respecto a la Cuenta de Ahorros No. 236-26977855 a nombre de Margoína Ortiz Villa el despacho de primer nivel definió que en el expediente no se encontró algún principio de prueba del cual pudiera inferirse que dicho producto bancario fue adquirido por y con motivo de la sociedad mercantil, es decir, no había certeza de que dicha cuenta sirvió para administrar los recursos producto de la actividad comercial. Por consiguiente, correspondía al demandante demostrar que dicha cuenta de ahorros fue utilizada por la sociedad de hecho, para la administración de los recursos del SPA, sin embargo, el promotor de la demanda no logró acreditar tal situación, por lo que la decisión recurrida concuerda con lo que se logró demostrar en el trámite.

En consecuencia, al ser admisible el análisis jurídico en que la decisión se basó sin que se aprecie elementos de prueba que permitan resolver de manera diferente el asunto puesto a consideración del despacho, la providencia

recurrida, proferida por el Juzgado 018 Civil del Circuito de Medellín, debe ser confirmada.

Por lo expuesto, el despacho RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión apelada.

SEGUNDO. CONDENAR en costas del recurso a la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de 1 SMLMV.

NOTIFÍQUESE


MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada